

Año: 2026

Expediente: 21730/LXXVII

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

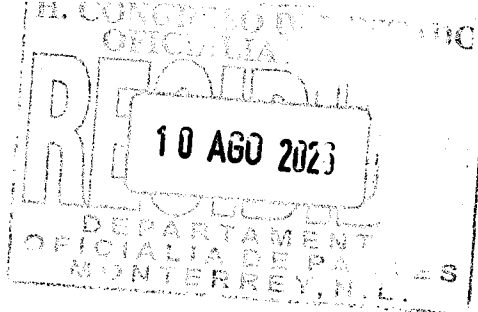
PROMOVENTE. C. LIC. ANDREA SOFÍA GARCÍA SIERRA Y UN GRUPO DE CIUDADANOS,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE INTEGRIDAD DIGITAL EN EL SERVICIO PÚBLICO, LA CUAL CONSTA DE 30 ARTÍCULOS Y 10 ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

INICIADO EN SESIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2026

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACION

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

LXXVII LEGISLATURA

SOLICITUD CIUDADANA

Para que esta H. Legislatura ejerza su facultad constitucional de presentar ante el H. Congreso de la Unión la:

LEY DE INTEGRIDAD DIGITAL EN EL SERVICIO PÚBLICO

(«Ley Narciso»)

Con fundamento en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en los artículos 102, 103, 104 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

PRESENTADA POR:

Lic. Andrea Sofía García Sierra

Fundadora de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C. y Licenciada en Derecho.

Lic. y Mtro. Arturo Ramírez González

Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Política Pública y Coordinador General de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C.

Monterrey, Nuevo León, a 10 de agosto de 2026.

Ciudadanos Diputados a la LXXVII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Presentes.

Con fundamento en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en los artículos 102, 103, 104 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, los suscritos presentamos la siguiente solicitud ciudadana para que esta H. Legislatura, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 96, fracción II, de la Constitución Política del Estado y el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente ante el H. Congreso de la Unión la iniciativa federal adjunta.

I. EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y EL PROBLEMA PÚBLICO

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíben expresamente la promoción personalizada de servidores públicos mediante propaganda gubernamental y ordenan que las leyes garanticen el estricto cumplimiento de dicha prohibición, incluyendo el régimen de sanciones correspondiente. Este mandato constitucional lleva diecinueve años sin recibir desarrollo legislativo específico en materia de publicidad digital personal.

La Biblioteca de Anuncios de Meta documenta gastos multimillonarios en publicidad digital personal vinculada a servidores públicos en funciones: el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y su cónyuge, también funcionaria designada, contrataron publicidad digital personal por más de dieciocho millones de pesos en los primeros meses de 2026, equivalentes a doscientos ocho mil pesos diarios.

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

El artículo 87 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho de iniciativa ciudadana a toda la ciudadanía nuevoleonesa, en forma individual o colectiva.

El artículo 96, fracción II, de la Constitución Política del Estado faculta al Congreso local para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión.

El artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce ese mismo derecho a las Legislaturas de los Estados.

III. PETICIÓN

Con base en lo expuesto, solicitamos respetuosamente:

- 1. Admitir la presente solicitud ciudadana conforme al artículo 87 de la Constitución Política del Estado y los artículos 102, 103, 104 y 105 del Reglamento Interior.
- 2. Turnarla a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su dictamen.
- 3. Que el Pleno ejerza la facultad prevista en el artículo 96, fracción II, de la Constitución Política del Estado y apruebe la presentación de la iniciativa federal adjunta ante el H. Congreso de la Unión.
- 4. Que la remisión incluya la solicitud expresa de turno a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción como comisión dictaminadora principal, con opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dado en el recinto del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a diez de agosto del año dos mil veintiséis.

PRESENZADO POR

Lic. Andrea Sofía García Sierra

Fundadora de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C. y Licenciada en Derecho

Lic. y Mtro. Arturo Ramírez González

Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Política Pública y Coordinador General de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C.

Con la adhesión de los fundadores de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C.:

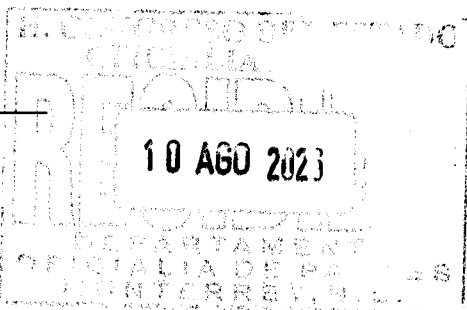
Carlos Salazar Lomelín

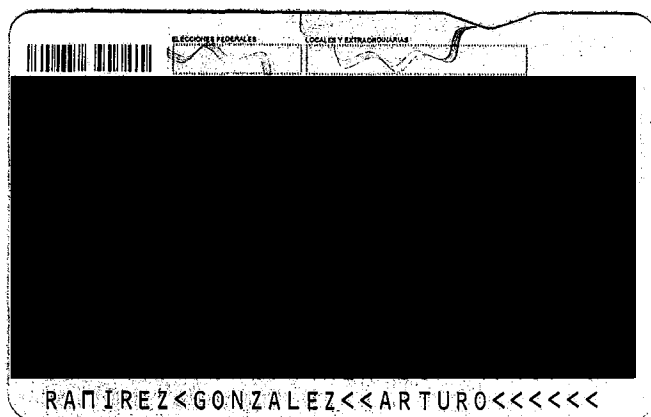
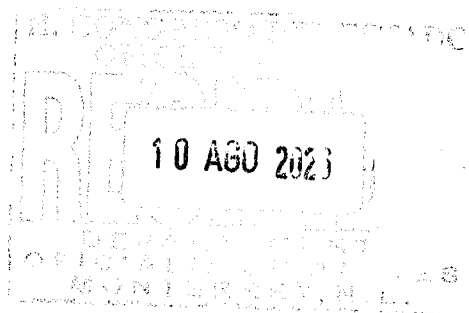
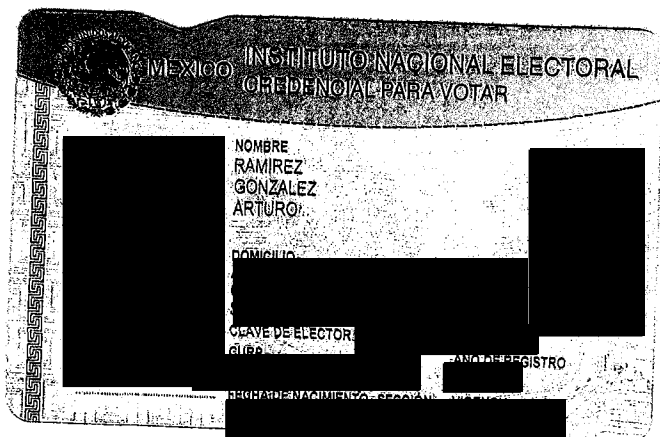
Javier Arteaga Gutiérrez

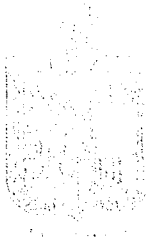
Federico Garza Santos

Juan Carlos Pérez Góngora

Víctor Zorrilla Vargas

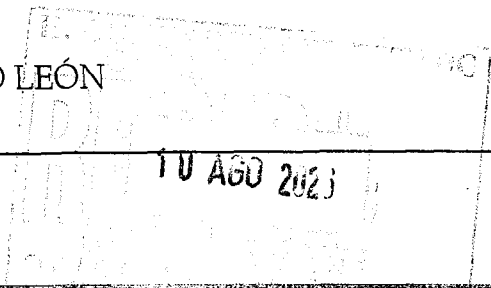






H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA

OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias (otros documentos o información que consideren se presenten); y c) Trámites y asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.



Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.

Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/aviso-de-privacidad-integral-oficialia-de-partes/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Julio 2026

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados y transferidos conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad:

Sí autorizo: ☒

No autorizo: ☐

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso, señalo el siguiente correo electrónico:

[Redacted email address]

En su caso, domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: [Redacted]

Núm. Ext.: [Redacted] Núm. Int.: [Redacted]

Colonia: [Redacted]

Municipio: [Redacted]

Teléfono(s): [Redacted]

C.P.: [Redacted]

[Redacted signature]
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL INTERESADO

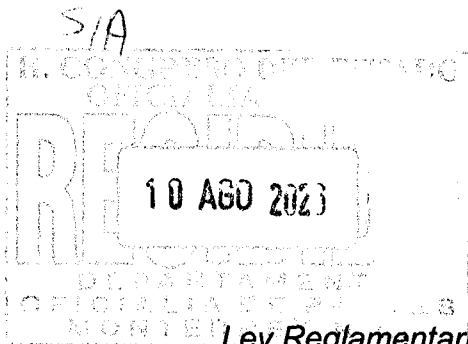
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS / SENADO DE LA REPÚBLICA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY DE INTEGRIDAD DIGITAL EN EL SERVICIO PÚBLICO



"Ley Narciso"

Ley Reglamentaria de los Párrafos Séptimo y Octavo del Artículo 134

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

-Gobernar no es influenciar. El servicio público no es una marca personal.-

PRESENTADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN —

LXXVII LEGISLATURA

En ejercicio del artículo 96, fracción II, de la Constitución Política del Estado de

Nuevo León

y del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

A solicitud de Lic. Andrea Sofía García Sierra y Lic. y Mtro. Arturo Ramírez

González, con la adhesión de los fundadores de Plataforma de Participación

Ciudadana RegioPoder A.C.

Monterrey, Nuevo León, a 10 de agosto de 2026

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. EL MITO

Narciso no murió de vanidad. Murió de confusión.

En la versión que Ovidio inmortalizó en las Metamorfosis, el joven más bello de Grecia se inclinó sobre un estanque y vio un rostro que no reconoció como el suyo. Lo tomó por otro. Creyó que ese reflejo era el mundo, que ese mundo lo miraba con adoración, que esa adoración era real. Murió sin entender que lo que amaba era su propia imagen multiplicada por el agua.

La tragedia de Narciso no es que se mirara demasiado. Es que confundió el reflejo con la realidad. Y en esa confusión, dejó de gobernar su propia vida.

II. LA REENCARNACIÓN

Dos mil años después, Narciso ha vuelto. No como mito. Como patrón de conducta verificable en tiempo real, en la pantalla de cualquier teléfono, sin registro, sin costo, en cualquier momento del día.

Se llama Biblioteca de Anuncios de Meta. Es la herramienta pública de transparencia publicitaria que Facebook e Instagram ponen a disposición de cualquier ciudadano del mundo. Y en ella, entre noviembre de 2025 a la fecha, puede verse con nombre, con cifra y con fecha, lo que Narciso ha vuelto a hacer en Nuevo León.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado: más de ocho millones de pesos en publicidad digital personal en noventa días. Su cónyuge —también funcionaria designada de ese mismo gobierno—: dieciocho punto siete millones de pesos combinados en los primeros tres meses de 2026. Doscientos ocho mil pesos diarios. Y así muchos otros que hemos visto que han replicado estas prácticas.

Narciso no murió en un estanque. Compró pauta en Meta.

III. LO QUE SE MEZCLA

Pero la tragedia moderna no es solo la vanidad. Es lo que se mezcla.

Varios de esos anuncios incorporan materiales producidos con recursos del erario: logotipos del gobierno, piezas audiovisuales diseñadas con presupuesto público, imágenes institucionales que son, por definición, patrimonio de todos los ciudadanos del Estado. Esos materiales no pertenecen al funcionario que los usa. Pertenecen a la ciudadanía que los pagó.

Y la empresa intermediaria que gestionó parte de esa pauta personal celebró contratos con ese mismo gobierno por sesenta y nueve millones de pesos en los dos años anteriores. El espejo y el espejismo en un solo negocio.

IV. EL VACÍO — UNA DEUDA CONSTITUCIONAL DE DIECINUEVE AÑOS

Lo más grave no es lo que ocurrió. Lo más grave es que ninguna ley lo prohíbe.

La Ley General de Comunicación Social regula únicamente la publicidad oficial pagada con recursos del erario. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece obligaciones de integridad pero no tipifica esta conducta. La legislación electoral prohíbe los actos anticipados de campaña dentro de los calendarios formales —pero no la campaña permanente, sostenida mes a mes, durante todo el mandato, con dinero que el funcionario declara como propio.

El resultado: Narciso actúa en perfecto cumplimiento de la ley. No porque sea inocente, sino porque el espejo aún no tiene marco.

Y esta laguna es una deuda constitucional de diecinueve años. El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado en 2007, ordena expresamente que *«las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones que haya lugar»*. La Constitución no dice «podrán garantizar». Dice «garantizarán». Es un mandato imperativo. El H. Congreso de la Unión tiene desde 2007 la obligación constitucional de expedir esta ley. La Ley de Integridad Digital en el Servicio Público no es una innovación legislativa. Es el cumplimiento tardío —con diecinueve años de retraso— de una orden constitucional que ningún Congreso tuvo la voluntad de cumplir.

V. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

La presente iniciativa constituye la ley reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 CPEUM. Su fundamento de competencia es triple: el artículo 134 párrafo 8 (mandato directo al legislador); el artículo 109 constitucional (responsabilidades de servidores públicos en los tres órdenes); y el artículo 73 fracción XXIX-V (coordinación federal en responsabilidades administrativas). El primero no es una facultad —es una obligación. Votar en contra de esta ley no es votar contra una iniciativa ciudadana. Es votar contra el artículo 134 de la Constitución.

En el plano convencional, la iniciativa desarrolla las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), artículos 7, 9 y 10, y es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH.

VI. LO QUE LA LEY PROPONE

Esta iniciativa no prohíbe que los servidores públicos se comuniquen. No limita su libertad de expresión. No interfiere en su vida política más allá del ejercicio del cargo. Lo que propone es elemental: que cuando una persona que ejerce funciones públicas contrate publicidad digital vinculada a su cargo, lo declare. Que la ciudadanía pueda ver en un registro público quién compra pauta, en qué plataforma, con qué recursos y por cuánto. Que los programas y las obras que pagaron los ciudadanos con sus impuestos así lo digan. Y que quien anuncie una obra o programa tenga atribuciones formales sobre él.

VII. NUEVO LEÓN COMO EVIDENCIA, EL PAÍS COMO ADVERTENCIA

Lo que ocurrió en Nuevo León no es una excepción. Es un laboratorio. Es lo que pasa cuando no existe regulación, cuando las herramientas digitales permiten comprar influencia masiva con pauta pagada, cuando el dinero fluye entre el gobierno y sus

proveedores de imagen sin que nadie tenga que declarar nada. Nuevo León no es el problema. Nuevo León es la evidencia de que el problema ya existe y de que el resto del país aún no tiene ley para enfrentarlo.

VIII. EL NOMBRE Y EL LLAMADO

Esta ley se llama Narciso porque Narciso no murió de amor propio. Murió porque nadie le puso un espejo con marco.

Durante décadas, la política mexicana ha visto multiplicarse los Narcisos sin que el orden jurídico les ofreciera resistencia. Cada administración trae los suyos. Cada pantalla los amplifica. Cada millón gastado en pauta personal durante el ejercicio del cargo es un millón que compra visibilidad que ningún ciudadano sin poder puede igualar, que distorsiona la equidad democrática, que borra la línea entre el servidor y el dueño, entre el mandatario y el monarca.

Este Congreso tiene hoy la oportunidad de hacer lo que corresponde: ponerle marco al espejo. No para destruir a nadie. Para que cada persona que ejerza funciones públicas en este país sepa, desde el primer día de su cargo, que la transparencia no es opcional, que los recursos públicos tienen nombre y apellido —el de los ciudadanos que los pagaron—, y que la diferencia entre gobernar y promocionarse tiene, a partir de hoy, consecuencias jurídicas reales.

Narciso murió mirándose. Gobernar exige mirar hacia afuera.

DECRETO

El H. Congreso de la Unión decreta:

LEY DE INTEGRIDAD DIGITAL EN EL SERVICIO PÚBLICO

CAPÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- *Objeto y naturaleza jurídica.* La presente Ley constituye la ley reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento del mandato constitucional que desde el año 2007 ordena al Poder Legislativo federal garantizar el estricto cumplimiento de la prohibición de promoción personalizada de servidores públicos, incluyendo el régimen de sanciones correspondiente. La ausencia de esta

ley durante diecinueve años constituye una omisión legislativa inconstitucional que la presente iniciativa viene a subsanar.

La Ley es de orden público, interés general y aplicación en todo el territorio nacional. Establece las bases mínimas obligatorias de aplicación nacional con criterios homologados que garantizan la uniformidad institucional en los tres órdenes de gobierno, en materia de: transparencia y declaración de publicidad digital personal pagada vinculada al cargo; identificación del origen ciudadano de recursos públicos en programas y obras; vinculación funcional en la comunicación institucional; prohibición del uso de recursos y materiales públicos en autopromoción personal; y el régimen sancionador con plenas garantías de debido proceso.

La presente Ley podrá citarse popularmente como 'Ley Narciso'.

Artículo 2.- *Ámbito de aplicación personal.* Son sujetos de esta Ley todos los servidores públicos previstos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con independencia de la denominación de su función y de si perciben remuneración económica. Quedan comprendidos, de manera enunciativa y no limitativa: los servidores de carrera, los de libre designación, los comisionados, los enlaces, los representantes especiales, los delegados, los asesores con funciones de representación o decisión, y quienes desempeñen empleos, cargos o comisiones a título honorario, honorífico o ad honorem, siempre que su función derive de nombramiento, acuerdo, convenio o cualquier instrumento jurídico emitido por autoridad competente. La naturaleza honorífica o gratuita del cargo no exime del cumplimiento de ninguna obligación prevista en esta Ley.

Artículo 3.- *Delimitación y no interferencia.* La presente Ley no regula la propaganda electoral ni las actividades de los partidos políticos y candidaturas. No regula la comunicación social institucional financiada con recursos del erario, regida por la Ley General de Comunicación Social. No restringe la libertad de expresión

personal de quienes ejercen funciones públicas en materias ajenas al ejercicio de su cargo. Su aplicación no produce consecuencias de naturaleza electoral.

Artículo 4.- Supletoriedad. Son supletorias de esta Ley, en el orden indicado: la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En todo lo que resulte aplicable, las autoridades interpretarán esta Ley de manera conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción, aplicando el principio pro persona.

Artículo 5.- Definiciones. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Publicidad Digital Personal Pagada (PDPP): la contratación, directa o indirecta, a título personal o mediante recursos propios o ajenos, de pauta publicitaria dirigida en plataformas digitales por parte de quien ejerza funciones públicas, cuando el contenido haga referencia al cargo que desempeña, a sus atribuciones, a programas, acciones o resultados de gobierno, o cuando incluya materiales institucionales.

II.- Plataformas digitales: los servicios de internet que permiten contratar publicidad pagada mediante segmentación automatizada de audiencias, incluyendo de manera enunciativa Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, LinkedIn y Google Ads, así como cualquier plataforma de naturaleza equivalente existente o futura.

III.- Materiales institucionales: toda imagen, video, infografía, logotipo, diseño, pieza audiovisual o texto producido total o parcialmente con recursos presupuestales de cualquier ente de la administración pública.

IV.- Vinculación funcional: la relación jurídica verificable entre quien ejerce funciones públicas y un programa, obra o acción pública, acreditada mediante

el instrumento jurídico —ley, reglamento, decreto, acuerdo o convenio publicado en el medio oficial— que le confiere atribuciones formales sobre dicho programa, obra o acción.

V.- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG): la dependencia del Ejecutivo Federal competente en materia de prevención y combate a la corrupción y buen gobierno, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

VI.- Registro Nacional de PDPP: el sistema electrónico de consulta pública, gratuita y permanente, integrado y administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el que se inscriben las declaraciones presentadas conforme a esta Ley.

VII.- UMA: la Unidad de Medida y Actualización determinada por el INEGI conforme a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

CAPÍTULO II — COMPETENCIA FEDERAL Y COORDINACIÓN NACIONAL

Artículo 6.- Competencia federal y bases mínimas obligatorias. En ejercicio de las facultades conferidas al H. Congreso de la Unión por los artículos 109, 134 párrafos séptimo y octavo, y 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley establece las bases mínimas obligatorias de aplicación nacional en materia de integridad digital en el servicio público. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus facultades en esta materia sujetándose estrictamente a dichas bases, sin contravenir el modelo federal. La libertad configurativa local existe únicamente respecto de aspectos procedimentales e institucionales no previstos expresamente en esta Ley.

Artículo 7.- Coordinación nacional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como autoridad rectora del sistema nacional de integridad digital, ejercerá las siguientes atribuciones de coordinación nacional:

I.- Emitir criterios homologados de interpretación, aplicación y supervisión de esta Ley, de observancia obligatoria para las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

II.- Operar el Registro Nacional de PDPP como plataforma única de consulta pública, incorporando las declaraciones de todos los sujetos obligados del país.

III.- Emitir lineamientos técnicos de implementación de las obligaciones de identificación, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.

IV.- Celebrar convenios de colaboración con las entidades federativas para garantizar la operación coordinada del sistema nacional.

V.- Presentar ante el H. Congreso de la Unión, dentro de los primeros sesenta días de cada año, un informe sobre el cumplimiento de esta Ley en los tres órdenes de gobierno.

CAPÍTULO III — OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, DECLARACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Artículo 8.- Obligación de declaración. Toda persona sujeta a esta Ley que contrate PDPP deberá declararlo ante la autoridad competente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación mensual de la pauta. La obligación se renueva cada mes en que se realice contratación.

Artículo 9.- Contenido mínimo de la declaración. La declaración deberá contener, cuando menos:

- a) Nombre completo, cargo, adscripción y orden de gobierno del declarante, con indicación de si el cargo es remunerado, honorario, honorífico o ad honorem.
- b) Plataforma o plataformas digitales en que se publicó la pauta.
- c) Periodo de difusión con fechas de inicio y término.
- d) Monto total en moneda nacional.
- e) Identificador público de la cuenta desde la que se contrató la pauta.
- f) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que los recursos son de origen lícito y guardan congruencia con las declaraciones patrimonial y fiscal del declarante.
- g) Nombre, razón social y RFC del intermediario cuando la contratación se realice a través de tercero.

Artículo 10.- Registro Nacional de PDPP. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno integra y mantiene el Registro Nacional de PDPP, de acceso público, gratuito y en línea, consultable por nombre, cargo, orden de gobierno, plataforma y periodo, con descarga en formato de datos abiertos. Se actualiza dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de cada declaración.

Artículo 11.- Identificación obligatoria de publicidad personal. Toda PDPP deberá contener, de manera permanente y visualmente legible durante toda su difusión, la leyenda: «Publicidad pagada con recursos personales por [nombre completo], [cargo], [orden de gobierno / ente público]».

Artículo 12.- Identificación del origen ciudadano de programas y obras públicas. En desarrollo del mandato del artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda comunicación oficial referente a programas sociales, obras de infraestructura, servicios públicos o cualquier acción

financiada con recursos públicos deberá incluir, en forma clara, permanente y en lugar destacado, la leyenda según el origen de los recursos:

- a) Recursos federales: «Financiado con los impuestos de los ciudadanos mexicanos.»
- b) Recursos estatales: «Financiado con los impuestos de los ciudadanos del Estado de [nombre].»
- c) Recursos municipales: «Financiado con los impuestos de los ciudadanos del Municipio de [nombre].»
- d) Recursos mixtos: las leyendas correspondientes a cada fuente.

Artículo 13.- Vinculación funcional en la comunicación de programas y obras públicas. La comunicación oficial sobre programas sociales, obras de infraestructura, servicios públicos o cualquier acción financiada con recursos públicos deberá ser protagonizada o avalada únicamente por quienes tengan atribuciones formales y verificables sobre el programa, obra o acción, conforme al instrumento jurídico publicado en el medio oficial correspondiente. Queda prohibido que la comunicación oficial sea protagonizada por quienes carezcan de vinculación funcional directa, con independencia del cargo que ostenten o de su notoriedad pública.

CAPÍTULO IV — LÍMITES DE GASTO EN PDPP

Artículo 14.- Límite proporcional de gasto. El gasto mensual en PDPP no podrá exceder el cinco por ciento del ingreso mensual neto declarado por el sujeto obligado en su última declaración patrimonial ante la autoridad competente, ni en ningún caso la cantidad de diez mil pesos mensuales. Dicho monto se actualizará anualmente conforme al INPC. Quien supere este límite incurrirá en infracción grave. En el caso de personas honorarias o ad honorem, el límite se calculará con base en los ingresos declarados ante la autoridad fiscal en el ejercicio inmediato anterior.

CAPÍTULO V — PROHIBICIONES

Artículo 15.- Conductas prohibidas. Queda prohibido a los sujetos obligados por esta Ley:

I.- Incluir materiales institucionales en cualquier PDPP, con independencia del origen de los recursos con que se pague la pauta.

II.- Utilizar activos digitales públicos —datos de usuarios, plataformas tecnológicas, infraestructura de comunicación, licencias de software— para diseñar, segmentar, gestionar o difundir PDPP.

III.- Contratar PDPP con personas físicas o morales que, al momento de la contratación, mantengan contratos vigentes o procedimientos de adjudicación en curso con el ente público correspondiente, cuando el sujeto obligado haya ejercido atribuciones de decisión, recomendación o supervisión sobre dichos contratos en los veinticuatro meses anteriores.

IV.- Contratar PDPP a través de: a) cónyuge, concubina o concubinario; b) parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado; c) personas que, al momento de la contratación o dentro de los doce meses anteriores, hayan tenido relación laboral, profesional, de prestación de servicios o cualquier vínculo remunerado con el sujeto obligado o con el ente público al que pertenece; d) personas morales en que cualquiera de los anteriores tenga participación accionaria o de control; cuando el propósito verificable sea eludir las obligaciones de esta Ley. La elusión se presume iuris tantum cuando el contenido sea sustancialmente idéntico al que contrataría el propio sujeto obligado. Esta presunción admite prueba en contrario.

V.- Contratar PDPP con personas físicas o morales que, dentro de los treinta y seis meses anteriores a la contratación, hayan prestado servicios al sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones de manera simultánea o sucesiva con actividades en el sector privado, cuando el contenido guarde relación con dichas funciones. La coincidencia se presume iuris tantum salvo prueba en contrario.

VI.- Utilizar personas de alta visibilidad o notoriedad pública como protagonistas de la comunicación oficial de programas u obras respecto de los cuales carezcan de atribuciones formales, cuando el propósito sea aprovechar su reconocimiento para amplificar estratégicamente el impacto comunicacional.

CAPÍTULO VI — RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 16.- Principios del sistema sancionador. El sistema sancionador se rige por los principios de tipicidad, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y garantía de audiencia, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda resolución sancionadora deberá estar debidamente fundada y motivada. Las presunciones iuris tantum admiten prueba en contrario.

Artículo 17.- Infracciones no graves. Son infracciones no graves:

- a) Presentar la declaración fuera del plazo cuando se subsane dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento.
- b) Omitir la leyenda de identificación cuando se corrija dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
- c) Declarar datos incompletos o inexactos, cuando no se subsanen dentro del plazo fijado por la autoridad, el cual no podrá ser menor a cinco días hábiles ni mayor a quince días hábiles contados desde la notificación del requerimiento.

Artículo 18.- Infracciones graves. Son infracciones graves:

- a) No presentar la declaración y no subsanarla conforme al inciso a) anterior.
- b) Declarar datos falsos.
- c) Superar el límite de gasto.
- d) Incluir materiales institucionales en PDPP.
- e) Utilizar activos digitales públicos en PDPP.

- f) Contratar PDPP con proveedores vinculados al gobierno.
- g) Eludir las obligaciones mediante interposición de terceros.
- h) Protagonizar comunicación de programa u obra sin vinculación funcional.
- i) Omitir la leyenda de origen ciudadano en comunicaciones oficiales.
- j) Reincidir en infracciones no graves dentro de los veinticuatro meses siguientes a la resolución firme.

Artículo 19.- Sanciones por infracciones no graves. Las infracciones no graves se sancionarán con:

- I.- Amonestación pública inscrita en el Registro Nacional de PDPP.
- II.- Multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la UMA vigente.

Artículo 20.- Sanciones por infracciones graves. Las infracciones graves serán resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto de sujetos federales, y por el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad federativa correspondiente respecto de sujetos estatales y municipales. Se sancionarán con:

- I.- Multa de quinientas a cinco mil veces el valor diario de la UMA vigente.
- II.- Suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo de quince a sesenta días naturales, cuando la infracción implique uso de materiales institucionales o activos digitales públicos. Para personas honorarias, la suspensión equivale a la separación temporal del cargo sin efecto económico adicional.
- III.- Inhabilitación de uno a cinco años, en caso de reincidencia en infracciones graves o concurrencia dolosa de dos o más supuestos. Solo podrá imponerse mediante resolución firme del tribunal competente.

Artículo 21.- Vistas a otras autoridades. Al emitir su resolución, la autoridad deberá:

- I. Dar vista a la autoridad electoral cuando advierta hechos de posible infracción electoral.
- II. Dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando existan indicios de conductas con relevancia penal.
- III. Informar al órgano de

fiscalización superior cuando los hechos impliquen irregularidades en recursos públicos.

Artículo 22.- Prohibición de doble sanción. Cuando los mismos hechos sean objeto de sanción en procedimientos distintos, la autoridad que resuelva con posterioridad tomará en cuenta las sanciones ya impuestas para que el conjunto resulte proporcional, en respeto al principio non bis in idem.

CAPÍTULO VII — PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 23.- Competencia e inicio. La autoridad competente instruye el procedimiento e impone sanciones no graves. Para infracciones graves, integra el expediente y lo remite al tribunal competente. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia. La denuncia podrá formularse hasta dos años después de concluido el cargo. Los denunciantes podrán solicitar la reserva de su identidad.

Artículo 24.- Etapas del procedimiento. El procedimiento comprenderá:

- I.- Admisión: dentro de diez días hábiles, con determinación de los hechos y notificación al presunto infractor.
- II.- Investigación: treinta días hábiles, prorrogable por veinte días adicionales mediante acuerdo fundado.
- III.- Audiencia y pruebas: plazo no menor a diez días hábiles para defensa, pruebas y alegatos.
- IV.- Resolución: veinte días hábiles siguientes al cierre de audiencia para infracciones no graves. En infracciones graves, remisión al tribunal para resolución definitiva.

Artículo 25.- Medios de impugnación. Contra las resoluciones en infracciones no graves proceden los recursos previstos en la legislación de transparencia y el juicio

de nulidad. Contra las del tribunal en infracciones graves proceden los recursos previstos en su ley orgánica y el juicio de amparo.

CAPÍTULO VIII — MONITOREO PERMANENTE Y DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 26.- *Monitoreo permanente.* La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizará monitoreo permanente de las herramientas públicas de transparencia publicitaria de las plataformas digitales. Dicho monitoreo:

- I.- Se limitará exclusivamente a herramientas e información de acceso público. Queda prohibido el acceso a datos privados sin orden judicial fundada y motivada.
- II.- Los resultados podrán utilizarse para inicio de procedimiento pero no constituirán prueba directa por sí solos.
- III.- Se publicarán informes trimestrales con los resultados.

Artículo 27.- *Denuncia ciudadana.* Cualquier persona podrá presentar denuncia ante la autoridad competente, electrónicamente o de forma presencial, con o sin identificación. La autoridad acusará recibo y se pronunciará sobre la admisión dentro de diez días hábiles.

CAPÍTULO IX — ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA OBLIGATORIA

Artículo 28.- *Armonización legislativa obligatoria.* Las entidades federativas, en armonización legislativa obligatoria con lo dispuesto en esta Ley, deberán:

- I.- Adecuar su legislación para garantizar, cuando menos, los estándares mínimos nacionales previstos en esta Ley, sujetándose estrictamente a sus bases, principios y mecanismos de control, sin contravenir el modelo federal.

II.- Crear o adecuar sus registros locales de PDPP en coordinación con el Registro Nacional, conforme a los criterios homologados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

III.- Garantizar que sus autoridades competentes cuenten con las atribuciones necesarias para aplicar esta Ley de manera directa e inmediata.

IV.- Abstenerse de expedir disposiciones que reduzcan, condicionen, atenúen, exceptúen o desnaturalicen las obligaciones, prohibiciones, sanciones mínimas o derechos de los denunciantes previstos en esta Ley. Cualquier disposición local en contrario se tendrá por no escrita y no producirá efectos jurídicos.

V.- Interpretar su regulación local de manera conforme con el objeto, principios y fines nacionales de esta Ley, privilegiando la interpretación que maximice la transparencia y la integridad digital.

VI.- Reportar semestralmente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el estado de su armonización legislativa y el número de procedimientos iniciados.

Artículo 29.- Índice Nacional de Armonización. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicará anualmente el Índice Nacional de Armonización en materia de Integridad Digital, evaluando el grado de adecuación legislativa e institucional de cada entidad federativa a los estándares mínimos nacionales.

CAPÍTULO X — DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 30.- Interpretación conforme. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular sus artículos 6°, 7°, 14, 16, 109 y 134, y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción ratificados por el Estado mexicano, aplicando el principio pro persona y privilegiando la interpretación que maximice el derecho de acceso a la información y la integridad en el servicio público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Declaraciones iniciales. Los sujetos obligados que, a la fecha de su entrada en vigor, se encuentren difundiendo PDPP deberán presentar la declaración dentro de los quince días hábiles siguientes.

TERCERO.- Censo inicial. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizará, dentro de los treinta días naturales siguientes, un censo inicial de la PDPP activa de los sujetos obligados federales mediante herramientas de transparencia publicitaria de acceso público.

CUARTO.- Registro de honorarios. Las personas que ejerzan funciones a título honorario, honorífico o ad honorem deberán registrarse ante la autoridad competente dentro de los quince días hábiles siguientes, acreditando el instrumento jurídico que funda su función.

QUINTO.- Leyenda de origen ciudadano. Aplicable a toda comunicación oficial emitida a partir de la entrada en vigor. Las campañas en curso dispondrán de diez días hábiles para adecuar sus materiales.

SEXTO.- Lineamientos técnicos básicos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitirá los lineamientos de implementación dentro de los treinta días naturales siguientes.

SÉPTIMO.- Registro Nacional operativo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pondrá en operación el Registro Nacional de PDPP dentro de los noventa días naturales siguientes.

OCTAVO.- Reglamento. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro de los noventa días naturales siguientes.

NOVENO.- Armonización legislativa. Las entidades federativas contarán con ciento veinte días naturales para adecuar su legislación a los estándares mínimos nacionales. Durante dicho plazo, esta Ley será aplicable de manera directa e inmediata. Ninguna entidad federativa podrá: I. Reducir las obligaciones de declaración, registro o identificación; II. Establecer sanciones inferiores a los mínimos previstos; III. Crear excepciones o exenciones no contempladas; IV. Limitar los derechos de los denunciantes; V. Modificar las definiciones del artículo 5. Cualquier disposición local contraria se tendrá por no escrita.

DÉCIMO.- Derogación. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en esta Ley.

Dado en el recinto legislativo del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil veintiséis, para su remisión al H. Congreso de la Unión conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRESENADO POR

LIC. ANDREA SOFÍA GARCÍA SIERRA

Fundadora de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C. y Licenciada en Derecho

LIC. Y MTRO. ARTURO RAMÍREZ GONZÁLEZ

Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Política Pública y Coordinador General de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C.

Con la adhesión de los fundadores de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C.

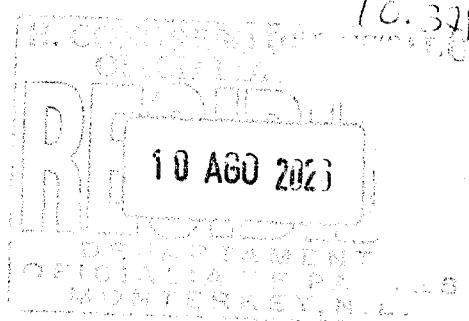
Carlos Salazar Lomelin

Federico Garza Santos

Víctor Zorrilla Vargas

Javier Arteaga Gutiérrez

Juan Carlos Pérez Góngora



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

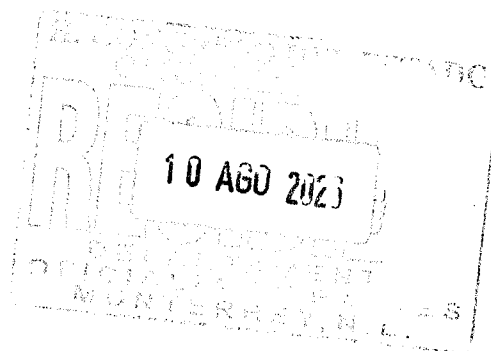
NOMBRE
RAMIREZ
GONZALEZ
ARTURO

DOMICILIO

CURP

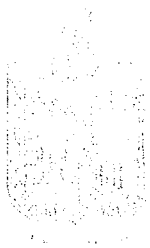
ANO DE REGISTRO

FECHA DE NACIMIENTO



SECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

RAMIREZ<GONZALEZ<<ARTURO<<<<<<<<



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA

10 AGO 2023

OFICIALÍA DE PARTES

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias (otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites y asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.



Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.

Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: https://www.hcnl.gob.mx/aviso_de_privacidad_integral_oficialia_de_partes/ o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Julio 2026

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados y transferidos conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad:

Sí autorizo: ☒

No autorizo: ☐

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso, señalo el siguiente correo electrónico:

[Redacted email address]

En su caso, domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: [Redacted]

Núm. Ext.: [Redacted] Núm. Int.: [Redacted]

Colonia: [Redacted]

Municipio: [Redacted]

Teléfono(s): [Redacted]

C.P.: [Redacted]

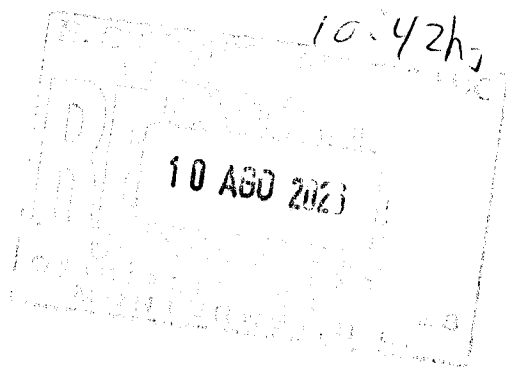
[Redacted signature]
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

**COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA**

**FICHA TÉCNICA DE CONSTITUCIONALIDAD
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE INTEGRIDAD DIGITAL EN EL SERVICIO PÚBLICO
(«Ley Narciso»)**

*Ley Reglamentaria de los Párrafos Séptimo y Octavo del Artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*

Elaborada por los promoventes para uso de la Comisión Dictaminadora.



10 de agosto de 2026.

I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa propone la expedición de la Ley de Integridad Digital en el Servicio Público, que constituye la LEY REGLAMENTARIA de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Clasificación normativa: Ley reglamentaria constitucional, de aplicación nacional en los tres órdenes de gobierno, con bases mínimas obligatorias.

Una ley reglamentaria constitucional no puede ser impugnada por existir. Su existencia está ordenada por la propia Constitución. La carga de la prueba se invierte: quien impugne debe demostrar que excede la Constitución — no que viola derechos.

Omisión legislativa inconstitucional: el párrafo 8 del artículo 134 fue adicionado en 2007. Desde esa fecha, el H. Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir esta ley. Su inacción durante diecinueve años constituye una omisión inconstitucional que la presente iniciativa viene a subsanar.

II. FUNDAMENTO DE COMPETENCIA LEGISLATIVA (TRIPLE)

Fundamento 1 — Mandato constitucional directo: El artículo 134, párrafo 8, CPEUM ordena: 'Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones que haya lugar.' El verbo 'garantizarán' en futuro imperativo constituye una obligación constitucional directa al legislador federal. No es una facultad discrecional — es un mandato.

Fundamento 2 — Responsabilidades de servidores públicos: El artículo 109 CPEUM faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Fundamento 3 — Coordinación federal: El artículo 73, fracción XXIX-V, CPEUM faculta al Congreso para legislar en materia de coordinación de responsabilidades administrativas en los tres órdenes de gobierno.

III. TEST DE PROPORCIONALIDAD (SCJN Y CIDH)

Paso 1 — Fin constitucional legítimo: El artículo 134 CPEUM establece expresamente la integridad y transparencia en el uso de recursos públicos y la prohibición de propaganda personalizada como fines constitucionales. **RESULTADO: FIN LEGÍTIMO ACREDITADO.**

Paso 2 — Idoneidad: La declaración de PDPP, el registro público y las sanciones crean un sistema de trazabilidad digital verificable. **RESULTADO: IDONEIDAD ACREDITADA.**

Paso 3 — Necesidad: La LGCS solo cubre propaganda con recursos del erario; la LGRA no tipifica esta conducta; la legislación electoral solo aplica en períodos formales; la autorregulación voluntaria no funciona. Ningún instrumento vigente cubre el supuesto. **RESULTADO: NECESIDAD ACREDITADA.**

Paso 4 — Proporcionalidad en sentido estricto: La carga (declarar, identificar, respetar un límite de \$10,000 MXN) es mínima frente al beneficio (transparencia democrática, equidad, cumplimiento constitucional). **RESULTADO: PROPORCIONALIDAD ACREDITADA.**

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES — ANÁLISIS

Libertad de expresión (arts. 6 y 7 CPEUM): La ley NO prohíbe que los servidores públicos se expresen. Solo exige transparencia sobre la pauta pagada vinculada al cargo. El art. 134 CPEUM es una restricción constitucional expresa que esta ley desarrolla. **NO HAY VIOLACIÓN.**

Privacidad (art. 16 CPEUM): El monitoreo se limita exclusivamente a herramientas de acceso público. No hay interceptación de comunicaciones privadas. **NO HAY VIOLACIÓN.**

Debido proceso (art. 14 CPEUM): Los tipos sancionadores usan elementos objetivos verificables. Las presunciones son iuris tantum. Las sanciones graves solo las impone un tribunal mediante resolución firme. **EL DEBIDO PROCESO ESTÁ GARANTIZADO.**

Igualdad (art. 1 CPEUM): El trato diferenciado tiene base constitucional expresa en el art. 134 CPEUM. Los servidores públicos pueden ser objeto de obligaciones adicionales por razón de su cargo. **NO HAY VIOLACIÓN.**

V. RESPUESTAS A LOS CINCO ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD MÁS PREVISIBLES

Argumento 1: 'El art. 134 solo prohíbe propaganda del poder público, no publicidad personal.' Respuesta: Cuando la PDPP usa materiales institucionales, el párrafo 7 aplica directamente. El párrafo 8 ordena crear esta ley con independencia de si cada acto concreto viola el párrafo 7.

Argumento 2: 'La ley invade competencias de las entidades federativas.' Respuesta: La SCJN ha validado que las leyes generales que desarrollan mandatos constitucionales aplicables a todos los órdenes pueden establecer bases mínimas nacionales (A.I. 26/2006).

Argumento 3: 'El límite de \$10,000 MXN viola la proporcionalidad.' Respuesta: El límite es el 5% del ingreso mensual neto declarado con un tope de \$10,000. Es proporcional al ingreso de cada servidor.

Argumento 4: 'Las presunciones de elusión violan la presunción de inocencia.' Respuesta: Las presunciones son iuris tantum — admiten prueba en contrario. La SCJN ha validado presunciones similares en la LGRA (Contradicción de Tesis 93/2018).

Argumento 5: 'El monitoreo permanente viola el art. 16 CPEUM.' Respuesta: El monitoreo se limita a herramientas de acceso público. No hay interceptación de comunicaciones. La información fue puesta públicamente por el propio anunciante.

VI. CONVENCIONALIDAD

UNCAC (ratificada por México, DOF 14 dic. 2003): Art. 7 (integridad en el sector público), Art. 9 (gestión de la hacienda pública con transparencia), Art. 10 (transparencia en la administración pública). La Ley Narciso es desarrollo directo de estas tres obligaciones internacionales.

CADH: El art. 13 es compatible conforme a la jurisprudencia de la CIDH (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 128). El art. 30 CADH permite estas restricciones: establecidas por ley, fin legítimo, necesarias en sociedad democrática, proporcionales.

VII. CONCLUSIÓN TÉCNICA

La iniciativa de Ley de Integridad Digital en el Servicio Público tiene competencia constitucional indiscutible, supera el test de proporcionalidad en sus cuatro pasos, no viola derechos fundamentales, es convencional y es resistente a impugnación. La omisión legislativa de 19 años no debilita la ley — la fortalece. Demuestra que el problema nunca fue de competencia sino de voluntad política.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: La iniciativa es constitucional, convencional y técnicamente sólida. Se recomienda su aprobación en los términos propuestos.

Elaborada por los promoventes ciudadanos conforme al artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y puesta a disposición de la H. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

PRESENTADO POR:

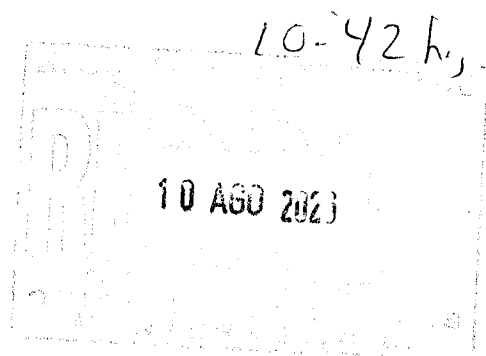
Lic. Andrea Sofía García Sierra

Fundadora de Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C.

Lic. y Mtro. Arturo Ramírez González

Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Política Pública

10 de agosto de 2026



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RAMIREZ
GONZALEZ
ARTURO

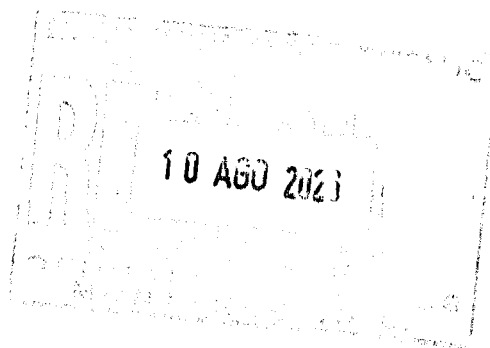
DOMICILIO

CLAVE DE ELECTO

CURP

AÑO DE REGISTRO

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

RAMIREZ<GONZALEZ<<ARTURO<<<<<<

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA

OFICIALÍA DE PARTES

10 AGO 2023

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias (otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites y asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.



Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.

Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: https://www.hcnl.gob.mx/aviso_de_privacidad_integral_oficialia_de_partes/ o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Julio 2026

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados y transferidos conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad:

Sí autorizo: ☒

No autorizo: ☐

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso, señalo el siguiente correo electrónico: [REDACTED]

En su caso, domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: [REDACTED]

Núm. Ext.: [REDACTED] Núm. Int.: [REDACTED]

Colonia: [REDACTED]

Municipio: [REDACTED]

Teléfono(s): [REDACTED]

C.P.: [REDACTED]

[REDACTED]
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO